

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, siete (07) de octubre de dos mil veintiuno (2021)

DEMANDANTE	: MARTA LUCÍA VILLADA PANIAGUA
DEMANDADO :	: COLPENSIONES
TIPO DE PROCESO	: ORDINARIO
RADICADO NACIONAL	: 05-001-31-05-020-2017-00898-01
RADICADO INTERNO	: 236-21
DECISIÓN	: CONFIRMA SENTENCIA
ACTA NÚMERO	: 274

En la fecha, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL, procede a emitir sentencia de segunda instancia en la que se estudia el recurso de apelación, en el proceso de la referencia. La Sala, previa deliberación, adoptó el proyecto presentado por el ponente, Doctor HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ, que a continuación se traduce en la siguiente decisión:

De conformidad con el **Decreto 806 de 2020**: “Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”, artículo 15, la sentencia se profiere escrita.

ANTECEDENTES

La parte demandante solicita, el reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente en calidad de cónyuge del Sr. RODRIGO ANTONIO GRAJALES MEDINA, desde el fallecimiento de este, que tuvo lugar el 11 de julio de 2017; al pago de los reajustes anuales de ley, las mesadas adicionales, al pago de

los intereses moratorios, la indexación de las condenas; y se condene a Colpensiones en costas procesales.

Como supuestos fácticos con que sustenta sus pretensiones, expone que contrajo matrimonio con el Sr. RODRIGO ANTONIO GRAJALES MEDINA, el 20 de diciembre de 1980, de esa unión procrearon dos hijos que son mayores de edad y convivieron juntos desde esa fecha hasta el año 2003, compartiendo techo, lecho y mesa en forma ininterrumpida. Que la pareja se tenían cariño, amor y se regían bajo el respeto, auxilio mutuo y su cónyuge nunca sostuvo relación sentimental distinta a la demandante; la pareja nunca se separó de cuerpos, ni liquidó la sociedad conyugal. El Sr. GRAJALES MEDINA, en toda su vida laboral cotizó 395 semanas, las cuales fueron cotizadas con anterioridad al 1º de abril de 1994, lo que quiere decir, que cotizó 300 semanas antes del 1º de abril de 1994. El Sr. RODRIGO ANTONIO GRAJALES MEDINA, falleció el 11 de julio de 2017. La demandante solicitó la pensión de sobreviviente el 21 de julio de 2017, la cual fue negada en resolución 170.563 de 2017 por no contar con 50 semanas en los 3 años anteriores a la muerte.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

En sentencia del 13 de agosto de 2021, el Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Medellín, DECLARÓ que la demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente, causada con ocasión a la muerte de su cónyuge, el Sr. RODRIGO ANTONIO GRAJALES MEDINA, en aplicación del principio de la condición más beneficiosa, conforme el reiterado precedente judicial de la Corte Constitucional. Le ORDENÓ a Colpensiones, a reconocer y pagar a la demandante, la pensión de sobreviviente desde el 11 de julio de 2017 (fecha del fallecimiento del causante) y hasta que subsistan las causas que originaron el reconocimiento del derecho. CONDENÓ a Colpensiones al pago del retroactivo pensional causado desde el 11 de julio de 2017 al 30 de agosto de 2021, bajo el importe de 13 mesadas pensionales anuales, el cual asciende a la suma de \$43.757.090; le ordenó que continuar pagando a la demandante a partir del 1º de septiembre de 2021, una mesada pensional de un salario mínimo legal, sin perjuicio de los incrementos de ley y bajo el importe de 13 mesadas pensionales anuales.

ABSOLVIÓ a Colpensiones del pago de los intereses moratorios. CONDENÓ al pago de la indexación del retroactivo pensional generado desde el momento al cual se causa y hasta que se efectúe el pago total de la obligación. Y condenó en costas a Colpensiones.

IMPUGNACIÓN

El apoderado de Colpensiones solicita se revoque la sentencia y se absuelva a su representada de las pretensiones de la demanda, por considerar que se incurrió en un error por parte del despacho, al hacer una aplicación plus ultractiva de la norma. Sustenta su recurso, citando un caso similar, que corresponde a la sentencia SL 3270 de 2021. Y expone que el error se deriva, al haber dado aplicación de normativas derogadas o sustituidas por otras normas, devolviéndose dos legislaciones atrás, toda vez que el causante falleció en el 2017, siendo aplicable la Ley 797 de 2003, y en aplicación de la condición más beneficiosa, le es aplicable la Ley 100 de 1993, pero dar aplicación al Acuerdo 049 de 1990 es hacer una búsqueda histórica, tal y como lo ha indicado la Corte Suprema de Justicia.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

El apoderado de Colpensiones solicita la revocatoria de la sentencia toda vez no se cumplieron los requisitos de los arts 12 y 13 de la Ley 797 de 2003 toda vez que la demandante y el causante solo convivieron hasta el año 2003, faltando así al requisito objetivo de la convivencia mínima anterior a la muerte del afiliado o pensionado, es decir, el 11 de julio de 2017; adicionalmente, deben ser tenidas en cuenta las inconsistencias en las que incurre la demandante en su declaración de parte, en la cual desconoce la fecha de fallecimiento del actor, el año de convivencia y en general, situaciones puntuales que por un simple análisis lógico deben ser de su conocimiento por lo que se debe desestimar una convivencia durante los 5 años anteriores a su muerte.

Y respecto al requisito mínimo de semanas de cotización exigidos por la norma, tampoco fue acreditado porque en la historia laboral, se extrae que no realizó cotizaciones entre el 11 de julio de 2014 y el 11 de julio de 2017.

Considera que el análisis de la prestación bajo el principio de la condición más beneficiosa, debe hacerse bajo los parámetros de la norma inmediatamente anterior a la vigente para el momento del deceso, conforme se indicó en la sentencia SL 1938 del 2020, y en este sentido, la norma anterior corresponde a la Ley 100 de 1993, de la cual no cumple los requisitos, porque no realizó ninguna cotización en el año anterior a su fallecimiento.

Y no hay lugar a aplicar el Decreto 758 de 1990 conforme pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia en las sentencias SL 4650 de 2017, SL 500 de 2021.

PRONUNCIAMIENTO JURÍDICO

El problema jurídico en esta instancia gira en determinar en apelación: i) Si hay lugar a absolver a Colpensiones de la condena impuesta, por haber dado aplicación al Acuerdo 049 de 1990 en aplicación del principio de la condición más beneficiosa.

Y en el grado jurisdiccional de consulta, en caso de ser confirmada la sentencia de primera instancia, se deberá: i) Analizar si el Sr. RODRIGO ANTONIO GRAJALES MEDINA dejó causados los requisitos del Acuerdo 049 de 1990; ii) Si la demandante cumple el test de procedencia en los términos argumentados por la Corte Constitucional en la sentencia SU 005 de 2018; iii) Revisar el valor reconocido por concepto de retroactivo de la pensión de sobreviviente; iv) Si la demandante tiene derecho al pago de indexación y costas procesales.

No es objeto de discusión que los señores RODRIGO ANTONIO GRAJALES MEDINA y MARTA LUCÍA VILLADA PANIAGUA contrajeron matrimonio el 20 de diciembre de 1980 según el registro civil de matrimonio fl. 47 del expediente digital 01; que el Sr. JOSÉ LUIS MUÑOZ LÓPEZ cotizó a Colpensiones 395 semanas desde el 21 de enero de 1975 al 22 de julio de 1987, según consta en la historia laboral del expediente digital 06; el afiliado falleció el 11 de julio de 2017 según el registro civil de defunción de fl. 32 del expediente digital 01; la demandante solicitó pensión de sobreviviente el 21 de julio de 2017 y por medio de resolución 170.563 de 2017 le fue negada la prestación económica porque de conformidad con la declaración extrajuicio rendida por la solicitante,

no cumplió con el requisito establecido en el literal c) del art. 47 de la Ley 100 de 1993 modificado por el art. 13 de la Ley 797 de 2003 (fls. 35 a 39 del expediente digital 01); el anterior acto administrativo fue confirmado en resolución 213.081 de 2017 por no cumplir el requisito mínimo de convivencia de mínimo 5 años inmediatamente anteriores a la fecha del fallecimiento del causante, porque en las declaraciones juramentadas y los argumentos de la solicitante, se afirmó que se casaron el 20 de diciembre de 1980, se separaron en el año 2003 y posteriormente convivieron durante 3 años antes de la muerte del causante (fls. 42 a 46)

En primera instancia se consideró que, en este caso, que la demandante es beneficiaria del afiliado fallecido y tiene derecho a la pensión de sobreviviente por cumplir los presupuestos del test de procedencia plasmado en la sentencia SU 005 de 2018, y porque el afiliado fallecido, dejó acreditado la densidad de semanas del Acuerdo 049 de 1990 a efectos de dar aplicación del principio de la condición más beneficiosa.

Pues bien, en el presente caso, se tiene claro que al haber fallecido el Sr. RODRIGO ANTONIO GRAJALES MEDINA el 11 de julio de 2017, la normatividad aplicable al caso concreto es el arts. 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, modificados por los arts. 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, en donde se señala que:

“Artículo 46. REQUISITOS PARA OBTENER LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES. Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes: (...) 2. Los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que fallezca, siempre y cuando éste hubiere cotizado **cincuenta semanas dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento....**”

Artículo 47: Son beneficiarios... a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte;. (...).”

Vista la norma transcrita, para la Sala la demandante es beneficiaria de la prestación económica solicitada, teniendo en cuenta que las testigos ESTELA GRAJALES DE SUAZA, LUZ MERY MUÑOZ CABALLERO y PAULA ANDREA GRAJALES VILLADA (hermana del causante, vecina e hija de la demandante y causante, respectivamente), fueron concordantes en asegurar que la pareja convivió bajo el mismo techo desde el matrimonio que tuvo lugar en el año 1980 hasta el año 2003 (23 años) y desde el 2006 hasta la muerte del afiliado que tuvo lugar en el año 2017 (11 años), existiendo una separación de cuerpos por tres años en los años 2003 a 2006. Afirmaciones de las cuales se extrae la convivencia de la pareja en los 5 años con anterioridad a la muerte del afiliado.

Sin embargo, si eso no fuera así y con base en la afirmación hecha por la demandante en su interrogatorio de parte se adopta como confesión que la convivencia fue hasta el año 2003, en vista que la demandante aseguró haber vivido con el Sr. RODRIGO ANTONIO GRAJALES MEDINA por 23 años, desde 1980 al 2003, igualmente se cumpliría el requisito de la convivencia de los 5 años, toda vez que esta Sala es de la posición, que cuando se trata de muerte de un afiliado o de un pensionado, la cónyuge con sociedad conyugal vigente debe acreditar **5 años de convivencia en cualquier tiempo**, en aplicación de lo considerado por la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia en sentencias SU 453 de 2019, y en sentencia 40.055 de 2011, 41.637, 42.425 y 45.038 de 2012 y 42.193 de 2014, entre otras. Lo anterior se concluye de lo señalado en la sentencia 42.193 de 2014 que reza:

*“... quien acompañó al pensionado o afiliado, y quien, por demás hasta el momento de su muerte le brindó asistencia económica o mantuvo el vínculo matrimonial, pese a estar separados de hecho, siempre y cuando aquel haya perdurado los 5 años a los que alude la normativa, **sin que ello implique que deban satisfacerse previos al fallecimiento, sino en cualquier época**», se debe aplicar también en los casos en que no exista compañera o compañero permanente al momento del fallecimiento del afiliado o pensionado”. (Negrilla fuera del texto)*

Y recientemente, en sentencia SL 359 de 2021 señaló:

“Al respecto, esta Sala ha señalado que la demostración de los lazos familiares y afectivos, en el caso de la cónyuge con vínculo matrimonial vigente y separado de hecho del causante, no es una

exigencia prevista en el inciso 3.º del literal b). Lo anterior, en la medida que el texto de tal disposición establece que, en ese evento, la consorte tiene derecho a una cuota parte de la pensión de sobrevivientes, proporcional al tiempo convivido con el afiliado fallecido.

*En efecto, esta Corporación tiene adoctrinado que «**la convivencia de la consorte con vínculo marital vigente y separación de hecho con el pensionado (...) en un periodo de 5 años**», puede ser acreditado «**en cualquier tiempo**». Ello, en aras de cumplir la finalidad de proteger a quien desde el matrimonio aportó a la construcción del beneficio pensional del de cujus, en virtud del principio de solidaridad que rige el derecho a la seguridad social (CSJ SL, 24 en. 2012, rad. 41673, CSJ SL7299-2015, CSJ SL6519-2017, CSJ SL16419-2017, CSJ SL1399-2018, CSJ SL5046-2018, CSJ SL2010-2019, CSJ SL2232-2019, CSJ SL4047-2019, CSJ SL4771-2020, CSJ SL3850-2020 y CSJ 2746-2020).» Negrilla fuera del texto)*

Sin embargo, en lo que respecta al requisito para obtener la pensión, de acreditar la cotización de las 50 semanas en los últimos 3 años anteriores a la muerte de afiliado, el mismo no fue cumplido, dado que el Sr. RODRIGO ANTONIO GRAJALES MEDINA cotizó solo hasta el **22 de julio de 1987** (expediente digital 06) y el falleció el **11 de julio de 2017**, por lo que se deberá determinar si en aplicación del principio de la condición más beneficiosa se tiene derecho a la prestación reclamada.

En este orden de ideas, teniendo como pilar fundamental la aplicación de la Constitución Política de 1991, que en su artículo 53 y 48 dispone el principio de la condición más beneficiosa, al igual que lo hace el artículo 21 del Código Sustantivo del Trabajo, debe aclararse cuál es el alcance por vía jurisprudencia que se le ha dado a dicho principio.

Sobre la aplicación del referido principio de la condición más beneficiosa la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha venido implementando importantes cambios a partir del mes de enero del año 2017 y en tal sentido ha desarrollado una nutrida y consistente línea jurisprudencial de la cual a la fecha hacen parte más de 12 sentencias de casación y la primera la SL 4650 y SL 2358 de 2017, las que han venido siendo reiteradas por dicha corporación, entre otras en la sentencia SL 765 de 2018 y SL 1341 de 2019, en la cual se estableció una temporalidad o límite para la aplicación de dicho principio previendo sus efectos jurídicos por un lapso determinado de tres años después de la vigencia de la Ley 797 de 2003, esto es, hasta el **29**

de enero de 2006, lo que indica que para que a una persona se le pueda aplicar la Ley 100 de 1993, la muerte debe ocurrir en los tres años siguientes a la vigencia de la ley 797 de 2003, sin posibilidad de aplicar normas anteriores a esta, como lo es, el Decreto 758 de 1990.

El anterior criterio de temporalidad ha sido reiterado en sentencias posteriores tales como la SL 797, SL 4344 de 2018, SL 514 de 2019, SL 1887 y SL 5189 de 2020, entre otras.

Sin embargo, este tema ha sido tratado por la Corte Constitucional en la sentencia T-005 de 2018 en la que se concluyó:

*“... La resolución del segundo problema jurídico abstracto, a que se hizo referencia en el numeral 2 supra, supone, como seguidamente se precisa, ajustar la jurisprudencia constitucional en cuanto al alcance del principio de la condición más beneficiosa en materia de pensión de sobrevivientes. Para tales efectos debe la Sala Plena determinar en qué circunstancias este principio, que se ha derivado del artículo 53 de la Constitución Política, **da lugar a que se aplique, de manera ultractiva, las disposiciones del Acuerdo 049 de 1990 –o de un régimen anterior- en cuanto al requisito de las semanas de cotización, para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes de un afiliado que fallece en vigencia de la Ley 797 de 2003 .***

(...)

130. Para la Sala Plena, solo respecto de **las personas vulnerables** resulta proporcionado interpretar el principio de la condición más beneficiosa en el sentido de aplicar, de manera ultractiva, las disposiciones del Acuerdo 049 de 1990 –o regímenes anteriores- en cuanto al requisito de las semanas de cotización, para efectos de valorar el otorgamiento de dicha prestación económica, aunque la condición de la muerte del afiliado hubiese acaecido en vigencia de la Ley 797 de 2003. (...)

Posición que es plenamente acogida por esta Sala, con el fin de garantizar el derecho a la seguridad social y al mínimo vital de beneficiarios de los afiliados que logre superar el TEST DE PROCEDENCIA plasmado en la sentencia SU 005 de 2018, sentencia en la que además de compartir el criterio de temporalidad antes mencionado, se dio la posibilidad de aplicar de forma ultractiva normas anteriores tales como el Decreto 758 de 1990 **u otros regímenes anteriores**, siempre y cuando se cumpla con el test de procedencia.

Así las cosas, frente al salto normativo para dar aplicación al art. 46 de la Ley 100 de 1993 sin modificaciones, en virtud del principio de la condición mas beneficiosa, se tiene que el precepto en mención señala:

“Requisitos para obtener la Pensión de Sobrevivientes. Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes:

1. (...)

2. Los miembros del grupo familiar del afiliado que fallezca, siempre que éste hubiere cumplido alguno de los siguientes requisitos:

a) Que el afiliado se encuentre cotizando al sistema y hubiere cotizado por lo menos veintiséis (26) semanas al momento de la muerte;

b) Que habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado aportes durante por lo menos 26 semanas del año inmediatamente anterior al momento en que se produzca la muerte.” (Negrilla fuera del texto)

Y esta normatividad debe ser analizada en conexidad con los parámetros de temporalidad determinados en la sentencia SL 4650 de 2017, con la finalidad de dar claridad respecto a la forma en que debe acreditarse el requisito de las 26 semanas exigidas por la Ley 100 de 1993, la cual determinó para lo que nos interesa:

“Recapitulando, se debe conceder la pensión de invalidez, en desarrollo del principio de la condición más beneficiosa, cuando se cumplan los siguientes supuestos:

(...)

3.2 Afiliado que no se encontraba cotizando al momento del cambio normativo *a) Que al 29 de enero de 2003 el afiliado no estuviese cotizando. b) Que hubiese aportado 26 semanas en el año que antecede a dicha data, es decir, entre el 29 de enero de 2003 y el 29 de enero de 2002. c) Que la muerte se produzca entre el 29 de enero de 2003 y el 29 de enero de 2006. d) Que al momento del deceso no estuviese cotizando, y e) Que hubiese cotizado 26 semanas en el año que antecede al fallecimiento. (...).”*

Si bien la sentencia anteriormente mencionada hace alusión a la pensión de invalidez se precisa que las reglas trazadas en esta han sido acogidas para el principio de la condición más beneficiosa cuando se trata de pensión de sobrevivientes, por lo que acorde con dicha línea jurisprudencial, para causarse la pensión de sobrevivientes el causante debía acreditar el cumplimiento de 26 semanas **cotizadas en el año inmediatamente anterior a la entrada en vigencia de la Ley 797 de 2003**, esto es, entre el 29 de enero de 2002 y el 29 de enero de 2003, supuesto que no se cumple en este caso en tanto el causante dejó de cotizar el 22 de julio de 1987, y desde dicha fecha

en adelante no reportó ninguna cotización **y su muerte se produjo en el año 2017.**

Ahora bien, frente al salto normativo para dar aplicación al Decreto 758 de 1990, es necesario que sé que cumplan con el requisito de las 150 semanas en los 6 años anteriores a la vigencia de la Ley 100 de 1993 o 300 semanas en cualquier tiempo anterior al 1º de abril de 1994, las cuales se cumplen al haber cotizado a Colpensiones el Sr. RODRIGO ANTONIO GRAJALES MEDINA desde el 21 de enero de 1975 al 22 de julio de 1987, un total de **395 semanas** (expediente digital 06). Sin embargo, pese a superar las 300 semanas exigidas en el Decreto 758 de 1990, se hace necesario la superación del test de procedencia en los términos argumentados por la Corte Constitucional en la sentencia SU 005 de 2018 que dio la posibilidad de aplicar de forma ultractiva, normas anteriores al señalar:

“Por tanto, solo respecto de estas personas resulta proporcionado interpretar el principio de la condición más beneficiosa en el sentido de aplicar, de manera ultractiva, las disposiciones del Acuerdo 049 de 1990 –o regímenes anteriores- en cuanto al primer requisito, semanas de cotización, para efectos de valorar el otorgamiento de dicha prestación económica, aunque el segundo requisito, la condición de la muerte del afiliado hubiese acaecido en vigencia de la Ley 797 de 2003”.

Así las cosas, al aplicar el test de procedencia al caso concreto encontramos frente a cada exigencia lo siguiente:

I) Debe establecerse que el accionante pertenece a un grupo de especial protección constitucional o se encuentra en uno o varios supuestos de riesgo tales como analfabetismo, vejez, enfermedad, pobreza extrema, cabeza de familia o desplazamiento: Requisito este que **se encuentra acreditado**, teniendo en cuenta que de la prueba testimonial se extrae que la demandante nació el 10 de junio de 1957 lo que hace que para el año 2017 contaba con 60 años de edad y en la actualidad cuenta con 64 años de edad, y el estado de salud de la demandante se encuentra deteriorado, toda vez que la testigo PAULA ANDREA GRAJALES VILLADA (hija de la demandante y causante) aseguró que su madre es diabética, hipertensa, obesa y le han dado dos trombosis en la pierna.

II) Debe establecerse que la carencia del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes que solicita el accionante afecta directamente la satisfacción de sus necesidades básicas, esto es, su mínimo vital y, en consecuencia, una vida en condiciones dignas: Se encuentra acreditado, toda vez que a pesar de tratarse de una madre sustituta del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y la testigo LUZ MERY MUÑOZ CABALLERO aseguró ser una de las fundadoras de las casas jardín de Bienestar Familiar desde hace 35 años aproximadamente, y en ese sentido con conocimiento de causa afirmó que Bienestar Familiar empezó a pagar el mínimo hace 5 o 6 años y con anterioridad a ello no lo pagaban, lo cierto es que la testigo PAULA ANDREA GRAJALES VILLADA expuso que la demandante vive en casa propia estrato uno; que el ingreso que obtiene su madre no alcanzan para solventar los gastos del hogar toda vez que la testigo no aporta por ser una persona con problemas renales, se encuentra desempleada y es madre de una niña menor de edad y su hermano Juan David es profesor de baile en los barrios; afirmación de la cual se extrae que la Sra. MARTA LUCÍA VILLADA PANIAGUA a la fecha ostenta la calidad de madre cabeza de hogar, de la cual depende el sustento de su núcleo familiar que se encuentra conformado por la demandante, sus dos hijos y una nieta, lo que conlleva a que sin el reconocimiento de la prestación económica solicitada, no se satisfacen las necesidades básicas de la hoy demandante.

iii) Debe establecerse que el accionante dependía económicamente del causante antes del fallecimiento de este, de tal manera que la pensión de sobreviviente sustituye el ingreso que aportaba el causante al tutelante-beneficiario: Se encuentra acreditado, teniendo en cuenta que la hermana del causante en su declaración, aseguró que la demandante tiene una guardería de Bienestar Familiar; su hermano en vida, se dedicaba a la albañilería, que trabajaba un día y el otro no; y el causante era el que sustentaba el hogar.

Por su parte, la testigo ESTELA GRAJALES DE SUAZA afirmó que, durante los 3 años de separación de la pareja, el Sr. GRAJALES MEDINA siempre iba a visitar a su cónyuge e hijos y le daba a la demandante el sustento y entre la demandante y el causante suplían la manutención de la casa.

Y la testigo PAULA ANDREA GRAJALES VILLADA fue clara en expresar que antes de la muerte de su padre, la Sra. MARTA LUCÍA VILLADA PANIAGUA no ganaba el mínimo y no tenía prestaciones, solo ganaba \$12.000 y con eso no le alcanzaban para cubrir los gastos; que los recursos para subsistir provenían de lo devengado por su padre por días y de la beca que ganaba su madre en el hogar comunitario; que al causante no le daba para realizar las cotizaciones, porque si cotizaba no podían comer.

Declaraciones de las cuales se deriva la dependencia económica de la demandante respecto de su cónyuge, porque con los ingresos que percibía en calidad de madre comunitaria, no la hacían autosuficiente en el cubrimiento de su manutención y era con los recursos del Sr. RODRIGO ANTONIO GRAJALES MEDINA que lograban obtener los recursos para subsistir.

IV. Debe establecerse que el causante se encontraba en circunstancias en las cuales no le fue posible cotizar las semanas previstas en el Sistema General de Pensiones para adquirir la pensión de sobrevivientes: Se encuentra acreditado que las mismas no se realizaron en primer lugar, porque el afiliado RODRIGO ANTONIO GRAJALES MEDINA laboraba por días debido a la artritis degenerativa que padecía, y en segundo lugar, porque la hija de la pareja fue clara en asegurar que la falta de cotización se debía a la ausencia de recursos económicos, porque en caso de que su padre realizara aportes a sistema de seguridad social, no tenían para su alimentación. Argumentos que la Sala encuentra plenamente sustentado, toda vez que las testigos y la demandante fueron concordantes en afirmar que el Sr. RODRIGO ANTONIO GRAJALES MEDINA se dedicaba a labores de la construcción y albañilería en forma independiente.

V. Debe establecerse que el accionante tuvo una actuación diligente en adelantar las solicitudes administrativas o judiciales para solicitar el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes: Este requisito para la Sala se cumple, pues desde la muerte del causante, la Sra. MARTA LUCÍA VILLADA PANIAGUA elevó derecho de petición solicitando la prestación económica de sobreviviente, la cual fue negada en la resolución 170.563 de 2017, decisión confirmada en la resolución 213.081 de la misma anualidad; y

la demanda fue presentada el 15 de diciembre de 2017 (fl. 28 expediente digital 01).

De conformidad con lo analizado anteriormente, se CONFIRMARÁ la decisión de declarar que la demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente.

2. En relación al retroactivo pensional e indexación reconocida

Una vez realizado el cálculo del retroactivo pensional, teniendo en cuenta un salario mínimo legal y 13 mesadas pensionales al año, por ser reconocido con posterioridad al Acto Legislativo 01 de 2005, la Sala CONFIRMARÁ el retroactivo reconocido desde el 11 de julio de 2017 al 31 de agosto de 2021, ello es desde la fecha de la muerte del afiliado hasta la sentencia de primera instancia, al no haber sido objeto de recurso de apelación el valor liquidado, por lo tanto la Sala no se pronunciaría al respecto.

Así mismo, se confirmará la condena impuesta de pagar la indexación del retroactivo pensional, toda vez que la parte accionante no tiene por qué soportar la responsabilidad de asumir la pérdida del valor adquisitivo, y el capital adeudado ha sido afectado por **pérdida del valor adquisitivo de la moneda**, más aún cuando el artículo 180 del CGP indica que los indicadores económicos nacionales son hechos notorios, y la sentencia SL 815 de 2021 determinó *“Además, resulta pertinente recordar que según la posición actual de la Sala, el juez tiene la facultad de imponer la indexación de las condenas de manera oficiosa, pues tal corrección monetaria pretende impedir que los créditos representados en dinero pierdan su poder adquisitivo por el fenómeno inflacionario, en procura de que la obligación se satisfaga de manera completa e integral (SL359-2021).”*

3. De la procedencia de las costas a cargo de Colpensiones

Se confirmará, teniendo en cuenta que el art. 365 del CGP reconoce costas *“1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso...”* y en este evento Colpensiones fue condenada al pago del retroactivo pensional e indexación de la condena.

Costas en esta instancia, a cargo de Colpensiones en la suma de \$908.526 por no prosperar el recurso interpuesto.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia emitida por el Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Medellín, de conformidad con lo expresado en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Costas en esta instancia, a cargo de Colpensiones en la suma de \$908.526 por no prosperar el recurso interpuesto.

TERCERO: Las anteriores decisiones se notifican por EDICTO, conforme lo dispuesto en la sentencia AL 2550, radicación 89628 del 23 de junio de 2021 de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Los Magistrados.



HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ



GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ



CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA



SECRETARÍA SALA LABORAL

EDICTO VIRTUAL

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la sentencia que a continuación se relaciona:

DEMANDANTE	: MARTA LUCÍA VILLADA PANIAGUA
DEMANDADO :	: COLPENSIONES
TIPO DE PROCESO	: ORDINARIO
RADICADO NACIONAL	: 05-001-31-05-020-2017-00898-01
RADICADO INTERNO	: 236-21
DECISIÓN	: CONFIRMA SENTENCIA

Magistrado Ponente
HUGO ALEXANDER BEDOYA DIAZ

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/126> por el término de un (01) día hábil. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Fijado el 08 de octubre de 2021 a las 8:00am

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

Se desfija el 08 de octubre de 2021 a la 5:00pm



RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
SECRETARIO